

COMISION PARLAMENTARIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA.

Intervención de MITXEL LAKUNTZA en nombre del sindicato ELA.

Egunon.

En primer lugar me gustaría agradecer a los grupos parlamentarios de Bildu y Aralar la invitación que se nos ha cursado para participar en esta sesión de trabajo con el objeto de valorar “La Mesa de Diálogo social y el modelo de concertación entre los agentes económicos y sindicales”.

Como conocerán, este sindicato es muy crítico con este tipo de acuerdos y antes de comenzar a hacer un valoración política del mismo es condición indispensable analizar desde parámetros medibles los datos socioeconómicos de estos acuerdos, algo que precisamente obvian los firmantes.

Para ello es indispensable analizar los resultados de la principal iniciativa impulsada en el marco de los acuerdos suscritos entre CEN, UGT y CCOO; los llamados Planes de Empleo.

Un análisis objetivo de los resultados del Diálogo Social:

Como sabrán, estos Planes están dotados de ingentes cantidades económicas, más de 1.600 millones de euros en los últimos 15 años, sin que a día de hoy nadie pueda justificar ni demostrar su oportunidad y efectividad.

Basta atender al retroceso de algunos datos para concluir el fracaso de este Plan: Incremento de los datos de desempleo (En 1998-9,4% 22.900- personas y 2013-18,2%, 55.500 personas) o los salarios (condición inherente a la calidad del empleo) donde navarra es la tercera comunidad donde más bajan los salarios el último año. La participación de los salarios en el PIB ha pasado del 47,1% en el año 2.000 al 40,7% del 2013.

SNE

A estos datos hay que sumar el informe de la Cámara de Comptos sobre el Servicio Navarro de Empleo, publicado este mismo mes. En el apartado dedicado a la eficacia y eficiencia del Plan, Comptos subraya la imposibilidad de atribuir efectividad alguna a este Plan, ya que no se ponderan ni objetivos ni indicadores, por lo que resulta difícil vincular la consecución de objetivo alguno con una sola de las medidas.

A este cuestionamiento hay que sumar otro, referido a la participación de UGT, CCOO y la CEN en los órganos de dirección que otorgan las subvenciones sobre los cursos de formación. En su página 38 Comptos recomienda textualmente: *“Debería evitarse que una misma entidad participe en los órganos de dirección de un organismo como el SNE, que dan su conformidad previa a los convenios de colaboración y pueda ser, al mismo tiempo, beneficiario de los mismos en el ámbito de las subvenciones de formación profesional para el empleo”*.

Recordarán que este informe y hasta el propio papel de Comptos y su presidente fueron duramente criticado por los sindicatos UGT y CCOO por recogerse en el mismo opiniones y valoraciones “políticas”. Más adelante rectificaron sus acusaciones, pero sorprendentemente el Gobierno sigue sin atender las recomendaciones que Comptos daba en el informe.

Por tanto, la principal carta de presentación del mal llamado Diálogo Social en Navarra es un auténtico fracaso al que se han destinado más de 1.600 millones bajo un manto de inconcreciones y generalidades que impiden incluso la propia auditoria del Plan.

A esto hay que sumar que no es la primera vez que Comptos emite un informe al respecto y que, cada vez que se inspeccionan las partidas del diálogo social destinadas al “empleo” y la formación continua, se cuestiona el modelo o se detectan irregularidades.

INAFRE

Prueba de ello es el informe de Comptos de julio de 2007 donde se analizan los fondos recibidos por Navarra desde la Unión Europea, y en el cual se analizan también las partidas referidas a la formación continua (INAFRE), que son gestionadas por UGT, CCOO y la patronal. En el informe se recogen irregularidades económicas en la justificación de los cursos (descuadre de hasta 700.000 euros) u otras, como el desfase entre el número de cursillistas declarados y el real.

PLAN MODERNA

A los dos informes citados que reflejan irregularidades y deficiencias hay que añadir un tercero, en el que Comptos se refiere al Plan Moderna para cuestionar que se haya constituido como fundación privada y no pública, cuando la mayoría de los recursos que emplea son públicos.

Puede entenderse fácilmente el interés de la patronal o del propio Gobierno en el modelo de gestión privado, pero es más difícil explicar la participación de los sindicatos UGT y CCOO en un Plan Moderna que en su inicio, tal como denunció ELA, abogaba incluso por la desaparición del carácter vitalicio del empleo público, o que fija como objetivo definir la propia Administración como organización empresarial. Un plan que confunde el interés propio de los empresarios con el interés de Navarra.

Por tanto, atendiendo tanto a estos tres informes de Comptos, donde se cuestionan los aspectos principales de diferentes planes incluidos en el seno del diálogo social, como al deterioro del mercado de trabajo, con un desempleo histórico, una política de recorte de prestaciones y deterioro de los servicios públicos a la vez que aumenta la pobreza, hay que preguntarse qué es lo que realmente se esconde detrás del Diálogo social.

Las características del Diálogo social:

a) No tratar lo importante. Lo que incomoda a Gobiernos y a Patronal.

En opinión de ELA, hay que mencionar al menos tres cuestiones.

La primera característica del Diálogo social es que no se abordan las cuestiones determinantes. No se incluye nada que resulte incómodo a la Patronal ni al Gobierno. ¿Qué queda para el Diálogo Social cuando lo esencial se impone unilateralmente? Hay margen para tratar la distribución de la riqueza, para modificar una política fiscal regresiva (Hay más de 10 puntos de diferencia en presión fiscal con la UE) o para acordar presupuestos más sociales; incluso para condicionar el papel del Gobierno con sus propios empleados, los trabajadores y trabajadoras públicas... En definitiva, ¿qué margen hay para modificar las políticas públicas, sociales o laborales del Gobierno? Es evidente que ninguno.

En consecuencia, si estos pactos nacen del acuerdo para apartar de la concertación las materias realmente importantes... ¿Qué queda?

b) Un modelo para el reparto de fondos públicos

Tal vez las declaraciones de la presidenta de Navarra en la firma del acuerdo para la Mesa permanente de Diálogo social sean las que mejor lo expliquen. Decía Barcina que “hay que trabajar por lo que nos une”, y si reparamos en las diferencias ideológicas a priori existentes entre los firmantes, cabe concluir que lo que realmente se esconde tras el diálogo social es la gestión de fondos públicos.

Es difícil llegar a calcular el montante total de las partidas de fondos públicos que pueden llegar a gestionar los firmantes, atendiendo a que las vías de financiación son varias y por conceptos diferentes, pero solamente las partidas presupuestarias directas para estas tres organizaciones se elevan a 55,3 millones de euros los tres últimos años.

A estas partidas de asignación directa hay que sumar la participación de la patronal y los sindicatos en la gestión de funciones para favorecer un modelo clientelista, mediante la subcontratación o cesión de gestión de millones de euros para favorecer su implantación en el mundo de trabajo. Esto hace que áreas que deberían ser de responsabilidad y gestión pública, como la vivienda protegida, la salud laboral, la inmigración o la formación continua de los trabajadores estén ahora bajo la tutela de estos sindicatos.

c) El modelo del diálogo social da cobertura al Gobierno y paz social a la Patronal

Por otro lado, sería ingenuo pensar que el Gobierno no tiene intereses de parte. Muy al contrario, el Gobierno encuentra en el Diálogo Social un respaldo público por parte de las organizaciones patronales y sindicales firmantes, en la medida en que aparece como facilitador de consensos y, por otro lado, consigue diluir las responsabilidades en el ejercicio de sus políticas. Oxígeno puro para el Gobierno. Ya que con discursos más o menos explícitos y con apelaciones al consenso, todos los implicados dejan entrever su deseo de continuidad de este Gobierno. Resultan muy llamativos tanto la posición pro-Gobierno de la patronal como los silencios y la falta de crítica e interpelación de UGT y CCOO.

Por otro lado, otra de las derivadas es el compromiso de UGT y CCOO de desactivar la acción sindical y garantizar así a la patronal una mayor paz social mediante un sindicalismo de perfil bajo. Así se recoge en el último acuerdo del 4 de junio de 2012 sobre negociación colectiva en Navarra (al que días después el Gobierno de Barcina aportó 14,1 millones para compensar el recorte del Gobierno de Rajoy en formación continua), por el cual se aceptan los criterios de moderación salarial o, recientemente, la propuesta del Gobierno de Navarra de precarizar aún más futuras contracciones eventuales en la función pública. Son este tipo de actuaciones y no otras las que explican las diferencias sindicales.

Conclusión:

- ELA no comparte por tanto la creación de esta Mesa de diálogo permanente en la medida que se ha demostrado totalmente ineficaz, no va a servir a los intereses de los trabajadores, y donde el único objetivo que se cumple es el reparto de la gestión de fondos públicos entre la CEN, UGT y CCOO.
- Es un despropósito, que corre el riesgo de agrandarse si se atienden las reivindicaciones de estos dos sindicatos para que esta Mesa tenga carácter decisorio. Es previsible que ante esa situación no sólo estas organizaciones acaben suplantando al Departamento de Trabajo, sino que aumente aún más la opacidad de este modelo.
- No hay justificación alguna para dejar en manos de la CEN-UGT y CCOO áreas de gestión pública. ELA ha denunciado recientemente en la Mesa por el Empleo del Parlamento que se subcontrate algo tan importante como la política de Empleo para dejarlo en manos de estas organizaciones. Así, ELA vuelve a exigir que la formación continua de los trabajadores/as sea de responsabilidad y gestión pública, al igual que lo son otros tramos de la formación como por ejemplo la formación profesional.
- ELA se dirige a los partidos de esta cámara para que trabajen en la retirada de aquellos planes y partidas presupuestarias que suponen un despilfarro de dinero público como los Planes de Empleo. Auténtico saco sin fondo. Aprovechamos esta ocasión para recordar la falta de mecanismos de control de ingentes cantidades de dinero público en diferentes materias y exigimos que estas partidas estén sujetas al control parlamentario.
- Por ello, es urgente una revisión completa del actual modelo de diálogo social y relaciones laborales en Navarra para entre otras cosas democratizarlo. No es creíble hablar de cambio social y político en Navarra sin desmontar lo que se ha convertido en una auténtica red clientelar.
- Por último, ELA cree que la labor sindical deber comenzar partiendo de dos premisas; no dar cobertura a la política de recortes de los Gobiernos y garantizar la autonomía financiera y política del sindicato. Sólo así se puede establecer que la prioridad del sindicalismo, más aún en una coyuntura de reformas y recortes, debe ser la de fortalecer la respuesta colectiva y organizar a los trabajadores y trabajadoras en cada centro de trabajo. Por lo tanto, es evidente que el problema no es la exclusión de organizaciones que estamos precisamente criticando un modelo fracasado e ineficaz. El verdadero diálogo social, el que no existe hoy, está directamente relacionado con la correlación de fuerzas.

Mejorar esa correlación y fortalecer socialmente la referencia de políticas alternativas es nuestra preocupación.

- ELA cree que este es el mejor camino para conseguir un cambio en las políticas públicas. Que la prioridad sea la creación de empleo, una mejor distribución de la riqueza y la mejora de la protección social. Precisamente lo que no va a hacerse en esa Mesa de Diálogo social permanente.

En Iruñea a 27 de Noviembre de 2013